

C.A. de Santiago

Santiago, veinte de abril de dos mil veintidós

Vistos:

Primero: Que en primer lugar es del caso aclarar que en audiencia de 1 de octubre de 2021, si bien la magistrada manifiesta su parecer sobre las penas propuestas por el Ministerio Público para efectos de aplicar el procedimiento abreviado, en la misma oportunidad agregó *“Sin perjuicio de lo resuelto precedentemente por el tribunal, discútase la procedencia eventual de un procedimiento abreviado respecto de este imputado (Sebastián González Chambers) en la audiencia de preparación de juicio oral, en la audiencia que ya se encuentra fijada para el 17 de enero de 2022 a las 9,00 horas”*. Lo anterior no fue objeto de impugnación por los intervinientes presentes en la audiencia, y así se hizo en la citada oportunidad procesal donde las partes debatieron sobre si el procedimiento se encontraba o no suspendido y sobre la oposición de los querellantes a tramitar la causa en procedimiento abreviado.

Lo anterior permite afirmar que no se verifican los presupuestos de la cosa juzgada en relación a lo resuelto con fecha 1 de octubre de 2021, por cuanto es la juez de la causa quien determina que el asunto se discuta y resuelva en otro estadio procesal, lo que fue aceptado por los intervinientes, quienes en audiencia preparatoria expusieron sus argumentos sobre el particular, razón por la cual resulta improcedente plantear ahora la ineficacia del procedimiento aduciendo el efecto de cosa juzgado de una decisión que no resolvió el asunto previo debate, por cuanto generó a las partes otra instancia de discusión.

Segundo: Que en segundo término, este tribunal estima que los hechos, de acuerdo con la ritualidad del procedimiento abreviado, se dieron por establecidos, precisamente, por cuanto el acusado y su defensa aceptaron los hechos imputados y no controvirtieron el mérito de los antecedentes de la investigación; y que, de conformidad a lo



expresado en el artículo 406 y siguientes del Código Procesal Penal se debe tener presente que el procedimiento abreviado es una alternativa al Juicio Oral y supone un acuerdo entre el imputado y el fiscal del Ministerio Público, que presupone a su vez la aceptación expresa del imputado de los hechos materia de la acusación y de los antecedentes de la investigación en que se fundan y su consentimiento a someterse a dicho procedimiento; y que el Ministerio Público solicite la imposición de una pena privativa de libertad que no exceda de cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo; no superior a diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo, tratándose de los ilícitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del título IX del Libro Segundo del Código Penal y en el artículo 456 bis A del mismo Código, con excepción de las figuras sancionadas en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies del Código Procesal Penal, o bien cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, cualquiera fuere su entidad o monto, ya fueren ellas únicas, conjuntas o alternativas.

Los requisitos descritos se satisfacen en el caso de autos sobre todo si se tiene presente que los querellantes aceptaron la calificación jurídica de los hechos y el grado de participación atribuido al acusado.

Tercero: Que, en la especie, el Juez aceptó la solicitud del fiscal y del imputado por considerarse suficientes los antecedentes de la investigación para proceder de conformidad a las normas del Título respectivo del Código Procesal Penal, y por cuanto la pena solicitada por el Ministerio Público se encuentra en el rango legal del inciso primero del artículo 406 del Código Procesal Penal, además de la verificación que el acuerdo fue prestado por el acusado libre y voluntariamente, con conocimiento de sus derechos. Además, consta de autos que los querellantes fueron escuchados en la audiencia, rechazando la sentenciadora expresamente la oposición al procedimiento por ellos formulada, lo que éste tribunal comparte.

Cuarto: Que, por su parte, el juez de la causa analizó y tuvo por cumplidos los presupuestos legales en tanto las penas propuestas por el ente fiscal se ajustaron a la legalidad vigente, considerando la

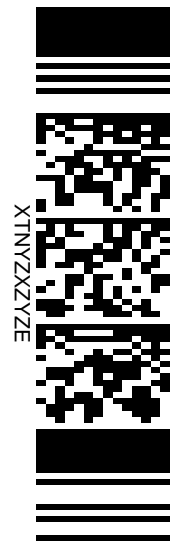


naturaleza de los delitos, la reiteración de los mismos y las minorantes de responsabilidad aceptadas, todo ello de acuerdo a lo previsto en los artículos 351 y 407 inciso tercero del Código Procesal Penal y artículos 67, 68 y 74 del Código Penal.

Quinto: Que no existe discusión en cuanto a la calificación jurídica de los hechos acreditados y la sentenciadora ha aplicado correctamente las atenuantes de los números 9 y 6 del artículo 11 del Código Penal; por cuanto, consta la intachable conducta anterior y la cooperación del imputado que se otorga por el solo hecho de haber consentido en el procedimiento abreviado, tal como dispone el inciso 4 del artículo 407 del Código Procesal Penal; y que por ende, las penas impuestas en la sentencia que se revisa se encuadran en el marco legal, la condena no supera la solicitada por el fiscal y corresponden a los delitos por los cuales el imputado fue acusado.

Sexto: Que en cuanto a la pena sustitutiva, se verifica en estos autos que se cumplen con los requisitos contenidos en el artículo 15 bis de la Ley N° 18.216; y por ende, es plenamente procedente la libertad vigilada intensiva impuesta en la sentencia apelada. En efecto, los informes allegados a la causa dan cuenta del positivo pronóstico de reinserción social del acusado y de la red de arraigo familiar que sustentan las conclusiones a que arriban los profesionales que lo emiten. Por otro lado, en la personalidad del acusado, según los exámenes psicológicos practicados, no se evidencian factores de riesgo para presumir que la pena de que se trata no sería eficaz; por el contrario, dan cuenta de elementos positivos para inferir que el condenado acatará cada uno de los requisitos legales de la libertad vigilada intensiva, como razona la sentencia en el motivo Séptimo al exponer los fundamentos que justifican esa decisión, máxime si se trata de su primer juicio de reproche, por lo que una pena intramuros resulta desproporcionada y no permite la efectiva resocialización del penado.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 370, 371, y demás del Código Procesal Penal, **se confirma**, la sentencia apelada de



veintiuno de enero de dos mil veintidós, dictada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en causa RIT 2069-2018.

Regístrese y comuníquese

**Redactada por la abogado integrante Bárbara Vidaurre Miller
Penal N° 518-2022**

No firma la señora Erika Villegas Pavlich, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones como Ministra Suplente.



Pronunciado por la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Jessica De Lourdes Gonzalez T. y Abogada Integrante Barbara Vidaurre M. Santiago, veinte de abril de dos mil veintidós.

En Santiago, a veinte de abril de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

